

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3998/2012.  
QUEJOSO: \*\*\*\*\*.**

VISTO BUENO  
SR. MINISTRO:

**PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.**

COTEJÓ:  
**SECRETARIA: KARLA I. QUINTANA OSUNA**

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al doce de noviembre de dos mil catorce, emite la siguiente

**S E N T E N C I A**

Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo directo en revisión 3998/2012, promovido por \*\*\*\*\*, contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil doce, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.

**I. ANTECEDENTES**

1. Para comprender el origen fáctico del proceso penal seguido contra el quejoso \*\*\*\*\*, es útil partir de los informes policiales y de la declaración del quejoso, los cuales se transcriben en la sentencia dictada por Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito el veintitrés de noviembre de dos mil doce<sup>1</sup>.
2. El dos de diciembre de dos mil diez, a las quince horas veinte minutos, dos policías municipales se encontraban de vigilancia en el mercado \*\*\*\*\*, en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando un hombre les indicó que en el área de carretilleros de la parte trasera del mercado, un hombre vestido de playera blanca y pantalón negro, portando un bulto rojo, se encontraba vendiendo sustancias psicotrópicas. Los policías se dirigieron a dicho lugar

---

<sup>1</sup> Juicio de Amparo Directo 491/2012. Fojas 35 a 76.

y encontraron a una persona “con las características señaladas, a quien abordaron”. Luego de que dicha persona dijo llamarse \*\*\*\*\*, le informaron “que le realizarían una revisión, (a lo cual) se negó y les arrojó el bulto rojo”, el cual fue asegurado por un policía y el otro lo revisó encontrando, entre otras cosas, “un total de trece pastillas al parecer clonazepam de 2 mg. cada una”. Agregaron los policías que al cuestionar al señor \*\*\*\*\* sobre dichas pastillas éste manifestó “que las utilizaba para el dolor de cabeza pero que no podía comprobar su legal procedencia; motivo por el cual fue detenido”.

3. De conformidad con la declaración ministerial de tres de diciembre de dos mil diez del hoy quejoso, cuando recogió la mochila que había dejado con un amigo en el mercado “fue abordado por dos agentes de la policía municipal, informándole que tenían una denuncia de que estaba vendiendo pastillas psicotrópicas, lo cual negó, pero los policías le arrebataron su mochila y el que la tenía metió la mano con el puño cerrado como si tuviera algo dentro de él y al poco tiempo la sacó con las pastillas que dicen que traía en posesión”. Añade que momentos antes de que los policías se le acercaran vio a su exsuegra hablando con ellos y menciona que “lo que pasó es como una represalia por un juicio de custodia en relación con su hija”. Además, menciona que “había tenido problemas anteriores” con uno de los policías que lo detuvieron, ya que su suegra le habría dicho a aquél que el señor \*\*\*\*\* “estaba agrediendo a su hija y no era cierto”.
4. El testigo que declaró sobre los hechos manifestó que “se percató de dos policías que se encontraban platicando con la suegra o ex suegra de \*\*\*\*\*” y que aproximadamente media hora después vio al quejoso “discutiendo con su esposa o exesposa y observó cómo se le acercaron dos policías ... que le empezaron a decir algo” y luego “vio cómo uno le arrebató su mochila y metió su mano en ella y cuando la sacó se le cayeron unas pastillas”.

5. De conformidad con la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil doce, una vez detenido el hoy quejoso, los policías municipales practicaron las siguientes diligencias: a) oficio policial mediante el que ponen al detenido a disposición del Director de la Policía Municipal de Mérida; b) examen médico psicofisiológico practicado al detenido, por un doctor adscrito al Departamento de Servicio Médico (15:25 hrs.); y c) diligencia de registro de cadena de custodia suscrito por uno de los dos policías aprehensores. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público en la ciudad de Mérida, Yucatán, a las 21:30 horas del dos de diciembre de dos mil diez.
6. Posteriormente el Ministerio Público realizó los dictámenes químico –para las sustancias incautadas-, de farmacodependencia para el detenido, y dactiloscópico. El primero resultó positivo, el segundo negativo y el tercero determinó que, al no reunirse los elementos necesarios para hacer un estudio comparativo, “los fragmentos de huellas antes encontradas no son útiles para el cotejo”. Asimismo, se realizaron varios careos.
7. El veintiocho de marzo de dos mil doce, la Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Yucatán, en la causa penal número 124/2010, consideró al señor \*\*\*\*\* penalmente responsable de la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple del psicotrópico clonazepam, previsto y sancionado por el artículo 195 bis y 193, ambos del Código Penal Federal, en términos del artículo 13, fracción II, del citado código sustantivo de la materia.
8. Inconforme con dicho recurso \*\*\*\*\* interpuso un recurso ordinario de apelación.
9. El veintidós de agosto de dos mil doce el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito confirmó la sentencia definitiva de primera instancia.

## **II. TRÁMITE**

10. **Demanda de amparo.** Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil doce ante el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito en Mérida, Yucatán, el quejoso, por conducto del Defensor Público Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan:

**Autoridades Responsables:** a) Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, como autoridad ordenadora; y b) Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, como autoridad ejecutora.

**Acto Reclamado:** La resolución emitida en el toca penal 113/2012-D de veintidós de agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, en la que confirma la sentencia definitiva de primera instancia, dictada en la causa penal 124/2010.

11. En la demanda de garantías el quejoso estimó violados los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que consideró convenientes.
12. **Resolución del juicio de amparo.** El cinco de septiembre de dos mil doce el Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al que correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número A.D. 491/2012. Seguidos los trámites de ley, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil doce, se dictó la sentencia respectiva, la cual negó la protección constitucional solicitada.
13. **Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con la resolución precisada en el resultando anterior, el tres de diciembre de dos mil doce, el quejoso interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.

14. **Trámite del recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** El tres de enero de dos mil trece el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente respectivo, el cual se registró con el número de amparo directo en revisión 3998/2012. Asimismo, admitió el recurso de revisión con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realizara, y ordenó su turno para el estudio respectivo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como su remisión a la Primera Sala, por ser un asunto cuya materia es de su exclusiva competencia.
15. El diez de enero de dos mil trece el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó el avocamiento del asunto.

### **III. COMPETENCIA**

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos primero, segundo fracción II y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal. Ello, en virtud de que el recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo en materia penal por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se llevó a cabo una interpretación directa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
17. Cabe precisar que con base en el transitorio tercero del Decreto de la nueva Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación con entrada en vigor al día siguiente, la tramitación del presente recurso de revisión, al derivar de un juicio de amparo directo

iniciado antes de dicha fecha, debe ser tramitado a la luz de la Ley de Amparo que regía entonces.

#### IV. OPORTUNIDAD

18. El recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa fue presentado en tiempo, ya que la sentencia se le notificó por medio de lista el miércoles veintiocho de noviembre de dos mil doce, surtiendo efectos el jueves veintinueve siguiente. El plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del viernes treinta de noviembre de dos mil doce, al jueves trece de diciembre del mismo año, sin contar en dicho cómputo los días uno, dos, ocho y nueve del mes de diciembre, por ser inhábiles conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo.
19. Dado que el recurso de revisión fue presentado ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito el tres de diciembre de dos mil doce, se interpuso oportunamente.

#### V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

20. A continuación se sintetizan los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en la demanda, las consideraciones del Tribunal Colegiado, así como los agravios hechos valer por el ahora recurrente:
21. **Conceptos de violación.** En su demanda de veintinueve de agosto de dos mil doce, el ahora recurrente hizo valer los conceptos de violación que a continuación se sintetizan:
  - a) Se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque las pruebas que se reunieron en la causa penal no justifican de manera plena su responsabilidad en la comisión del delito por el cual fue sentenciado<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ídem. Foja 6 vuelta.

- b) Consideró que en el caso no existió flagrancia<sup>3</sup>.
- c) Se vulneró el artículo 16 constitucional y el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que solicita su interpretación en cuanto a la flagrancia y la detención arbitraria<sup>4</sup>. Al respecto, citó la tesis 2470/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a “la flagrancia y a la seguridad del gobernado de no ser aprehendido a manos del Estado por el solo hecho de que alguien lo ha señalado como delincuente, sin aportar datos concretos que pudieran corroborar esa situación”.
- d) Manifestó que no fue puesto a disposición sin demora ante el Ministerio Público, sino que la policía lo retuvo indebidamente por más de seis horas, sin que se hayan justificado legalmente los motivos. Por tanto, “solicit[ó] al H. Tribunal Colegiado [...] la interpretación del numeral 16 de nuestra Carta Magna, en torno a la flagrancia citada y a la detención arbitraria, al no ser puesto a disposición del Ministerio Público, sin demora alguna”<sup>5</sup>.
- e) Además, sostuvo que en contravención con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional y en el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se le hicieron saber los derechos establecidos en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, sino hasta el momento en el que rindió su declaración ministerial. Consideró que ello también se debe de hacer sin demora<sup>6</sup>.

22. **Consideraciones de la sentencia recurrida.** En la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Tribunal Colegiado desarrolló los siguientes argumentos para negar al quejoso la protección constitucional solicitada sobre el tema de constitucionalidad:

---

<sup>3</sup> Ídem. Foja 7

<sup>4</sup> Ídem. Fojas 6 vuelta y 9.

<sup>5</sup> Ídem. Foja 9 vuelta.

<sup>6</sup> Ídem. Foja 9 vuelta y 10.

- a) Resulta infundado lo alegado por el quejoso, ya que de un examen oficioso de las constancias que integran el proceso penal, es claro que se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. No se evidencia violación alguna que haya trascendido al resultado del fallo, ni la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni se observa el incumplimiento de formalidades que establece el artículo 20 constitucional<sup>7</sup>.
- b) No existe violación al artículo 16 constitucional, ya que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable expresó las razones particulares que tomó en consideración para su dictado y citó los preceptos en que apoyó sus razonamientos, existiendo además adecuación entre dichos motivos expresados y las normas aplicadas<sup>8</sup>.
- c) Contrario a lo que afirma el quejoso, del cúmulo de probanzas se acredita tanto el delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple, como la plena responsabilidad del justiciable<sup>9</sup>.
- d) No se violaron los artículos 16 de la Constitución Federal, ni 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en el caso “concurrió la flagrancia delictiva en la detención del enjuiciado”<sup>10</sup>.

Al respecto consideró que es inexacto que la detención del quejoso se practicara “solo por el señalamiento informal de una persona que les dijo por azar acerca de su supuesta participación en el delito”. De las declaraciones de los agentes, “claramente se pone de relieve que lo que la defensa llama señalamiento por azar”, consistió en la denuncia recibida por los policías al encontrarse de vigilancia en el mercado, de que el quejoso, con descripción de la ropa que portaba, se encontraba vendiendo psicotrópicos. Por tanto, los policías, “al darse a la tarea de buscarlo, lo hallaron; siendo que el

---

<sup>7</sup> Ídem. Foja 59 vuelta.

<sup>8</sup> Ídem. Foja 65 vuelta

<sup>9</sup> Ídem. Fojas 65 vuelta a 66 vuelta.

<sup>10</sup> Ídem. Foja 71 vuelta.

activo, al verlos y ser interrogado, arrojó una mochila roja, la cual revisaron, encontrando dentro de ella tres blísteres de pastillas”. Por tanto, la detención del quejoso “se llevó a cabo una vez que los Policías Municipales estaban sabedores de que en la mochila que el mismo portaba, se encontraban trece pastillas de clonazepam, cuya tenencia no pudo justificar legalmente el enjuiciado”<sup>11</sup>.

En virtud de lo anterior, la detención del quejoso “se encuentra ajustada a derecho, por resultar claro que la misma se practicó por los Agentes, en el momento mismo en que el encausado se hallaba cometiendo el delito que se le reprocha; es decir, llevando consigo las pastillas clonazepam, sin contar con el permiso de la autoridad competente; y no por la simple sospecha sobre la posible comisión de un delito”<sup>12</sup>.

- e) Se cumplió lo establecido en el artículo 14 constitucional, al haberse llevado a cabo las formalidades del procedimiento conforme a la norma procesal<sup>13</sup>.
- f) “Una vez que el entonces indiciado fue detenido, se puso a disposición de la autoridad ministerial”, quien le otorgó la libertad provisional<sup>14</sup>.
- g) Es infundado lo alegado por el quejoso en relación con la puesta a disposición porque debe tenerse presente que la exigencia de poner al detenido sin demora no implica que se dejen de cumplir las obligaciones que tienen los elementos de la policía municipal, “en atención a las leyes que rigen su actuación”, ya que en esta dinámica influye el factor temporal y las condiciones de disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Agregó que “deben tomarse en cuenta para los efectos de la puesta sin demora de la persona, a la institución del Ministerio Público, las

---

<sup>11</sup> Ídem. Fojas 71 vuelta y 72.

<sup>12</sup> Ídem. Foja foja 72.

<sup>13</sup> Ídem. Foja 65 vuelta.

<sup>14</sup> Ídem. Foja 64 vuelta.

razones que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, que deberán ser compatibles con las facultades constitucionales y legales que corren a cargo de la policía”; todo lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte en el amparo directo en revisión 2470/2011<sup>15</sup>.

Destacó que en las aproximadas seis horas en que el quejoso estuvo detenido por la policía (de 15:20 a 21:30 hrs.) se practicaron las siguientes diligencias: a) oficio de los policías pusieron al detenido a disposición del Director de la Policía Municipal de Mérida; b) examen médico psicofisiológico practicado al detenido, por un doctor adscrito al Departamento de Servicio Médico (15:25 hrs.), y c) diligencia de registro de cadena de custodia suscrito por uno de los dos policías aprehensores<sup>16</sup>.

- h) El lapso en la puesta a disposición en el presente caso “se aprecia justificado a partir de un examen de razonabilidad de la actuación administrativa”, partiendo de la exigencia constitucional de que “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

El quejoso fue detenido en flagrancia delictiva por agentes policiales “quienes llevaron a cabo un procedimiento administrativo hasta poner al detenido a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión de hechos constitutivos de delito de posesión de droga”<sup>17</sup>.

- i) Agregó que el lapso en la puesta a disposición en el caso “no influyó en su debida defensa”, ya que el agente del Ministerio Público de la Federación, “al momento de recibirle su declaración ministerial, le

---

<sup>15</sup> Ídem. Foja 73.

<sup>16</sup> Ídem. Fojas 72 vuelta y 73.

<sup>17</sup> Ídem. Foja 73.

hizo saber los derechos que le otorgan los artículos 20 constitucional, 127 bis y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales”<sup>18</sup>.

- j) Fue correcto el grado de culpabilidad que le fue impuesto al quejoso, ya que se determinó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, por lo que la graduación de la sanción no resulta violatoria de las garantías del quejoso<sup>19</sup>.

23. **Agravios.** En el recurso de revisión de tres de diciembre de dos mil doce, el recurrente expresó, como agravios, los argumentos que a continuación se sintetizan:

- a) En los conceptos de violación se alegó “que la detención había ocurrido sin que se estuviera en presencia de flagrancia, también que se violó el mandato de la puesta a disposición sin demora ante el ministerio público” –contemplado en el artículo 16 constitucional y “que ha sido motivo de interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”<sup>20</sup>.
- b) El Tribunal Colegiado no interpretó debidamente lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, “específicamente la puesta a disposición sin demora del indiciado ante el Ministerio Público”. El quejoso consideró que se violó en su perjuicio dicho mandato constitucional, lo que desencadenó una serie de violaciones legales que concluyeron con la prueba<sup>21</sup>.

Contrario a lo señalado por el Tribunal Colegiado, si se compara la denuncia de hechos formulada por los policías y el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte, se advierte la violación al mandato de la puesta a disposición sin demora del detenido, ya que no se justificó que el tiempo en exceso que el detenido estuvo en

---

<sup>18</sup> Ídem. Foja 73 vuelta.

<sup>19</sup> Ídem. Fojas 73 vuelta y 74.

<sup>20</sup> Toca del amparo directo en revisión 3998/2012. Fojas 6 y 7 vuelta.

<sup>21</sup> Ídem. Fojas 3, 4 vuelta y 6.

poder de la policía haya sido el necesario para su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

c) “No existe un motivo razonable” para que la policía municipal que efectuó la detención del quejoso estuviera imposibilitada para ponerlo a disposición del Ministerio Público, “a pesar de que su reglamentación así se lo exige, al ser una de las obligaciones del Director de la Policía Municipal, y tener por más de 6 horas detenido a \*\*\*\*\*.” Agregó que “no se ha justificado con prueba alguna” que dichas horas fueran las que necesitaron para ponerlo a disposición, “máxime que los hechos acontecieron en la ciudad de Mérida, Yucatán”<sup>22</sup>.

d) No comparte la consideración del Tribunal Colegiado en cuanto a que se justifica el tiempo de su retención, por ser el necesario para elaborar el parte informativo, los certificados médicos y la protección de la cadena de custodia.

Al respecto manifestó que, por un lado, no existe la obligación para la policía de practicar un examen médico al detenido, y por otro, que el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que la policía municipal tiene el deber de comunicar la detención de una persona “por cualquier medio y sin dilación”. Además, destacó que el Reglamento Interior de la Policía Municipal de Mérida indica que el Director de la Policía Municipal tiene la obligación de remitir a las autoridades competentes a las personas detenidas como probables responsables de la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, en términos del artículo 16 constitucional<sup>23</sup>.

e) “No es necesario acudir a alguna interpretación diversa a la realizada por Tribunal Nacional, pues esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido explícita en sus resoluciones como lo

---

<sup>22</sup> Ídem. Foja 6 vuelta.

<sup>23</sup> Ídem. Foja 7.

que ocurre cuando se retiene a una persona en contravención al artículo 16 de la Constitución”, es decir, sin ponerlo a disposición sin demora<sup>24</sup>.

- f) Por otro lado, destacó que en los conceptos de violación también hizo valer que al momento de ser detenido el quejoso, “no se le informaron los motivos de la misma, ni sus derechos fundamentales, siendo evidente la violación al artículo 16 citado”<sup>25</sup>.
- g) Los policías tenían la obligación de hacerle saber en el momento de la detención de sus derechos constitucionales mencionados en el artículo 20 y en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales; la omisión de ello vulnera la ley, respecto de la información sobre las razones de la detención y los cargos formulados, y el Tribunal Colegiado “subsana al señalar que sí se le hicieron saber esos derechos, cuando rindió su declaración ministerial”<sup>26</sup>.

No está de acuerdo con lo sostenido por el Tribunal Colegiado, al afirmar que se cumplió con lo dispuesto en los citados artículos cuando el Ministerio Público hizo del conocimiento del quejoso las razones de la detención, los cargos formulados y su derecho a contar con un defensor al momento de rendir su declaración ministerial 24 horas después de haber sido detenido. El quejoso considera que tal obligación se debe de cumplir “desde el momento de su detención”<sup>27</sup>.

- h) Las anteriores violaciones “vulneran el principio de presunción de inocencia porque es evidente que la carga de la prueba” le compete al Ministerio Público y no al quejoso<sup>28</sup>.
- i) De acuerdo con los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte, al verse vulnerado el artículo 16 constitucional, por no haber sido

---

<sup>24</sup> Ídem. Foja 8 vuelta.

<sup>25</sup> Ídem. Foja 7 vuelta.

<sup>26</sup> Ídem. Fojas 8 y 8 vuelta.

<sup>27</sup> Ídem. Foja 8 vuelta.

<sup>28</sup> Ídem.

puesto a disposición sin demora ante el Ministerio Público, se genera la ineficacia de las diligencias practicadas. “Sostener lo contrario conllevaría a hacer distinciones en violaciones directas al texto constitucional”<sup>29</sup>.

- j) El artículo 1º constitucional abrió un paradigma extenso en torno a estos tópicos y “es aquí en donde de manera oficiosa los órganos jurisdiccionales pueden actuar y aplicar lo más benéfico al reo”. Además, el Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia interamericana –citó el caso Cabrera y Montiel vs. México- en torno a la violación del mandato de puesta a disposición sin demora, la información de los motivos de su detención y la lectura de sus derechos<sup>30</sup>.

## **VI. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO**

24. De conformidad con la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo de toda revisión en amparo directo.
25. En ese sentido, tras un análisis de la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y el recurso de revisión, se considera que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia a los que hace alusión los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en el punto Primero del Acuerdo Número 5/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
26. De acuerdo con las citadas normas constitucionales y legales, este Tribunal Constitucional puede conocer de la revisión de un amparo directo cuando,

---

<sup>29</sup> Ídem. Foja 11.

<sup>30</sup> Ídem. Fojas 11 y 7 vuelta.

además de acreditarse la oportunidad del recurso y la legitimación del promovente, se cumplan los siguientes requisitos: a) que esté de por medio una cuestión constitucional para la resolución del caso concreto y b) su estudio por parte de esta Suprema Corte fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico.

27. En relación con el primer requisito, con base en lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 21/2011-PL, fallada el nueve de septiembre de dos mil trece, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México, mediante el despliegue de un método interpretativo.
28. Lo anterior es así, pues el Tribunal Pleno sostuvo que como consecuencia de la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal de diez de junio de dos mil once, el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, a través del principio de mayor protección de los derechos humanos.
29. Por ende, una cuestión de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo. De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, entendiéndose con ello no sólo la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino de los

derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º, párrafo primero, de la propia Constitución Federal.

30. Si bien el citado artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo no establece de manera expresa la procedencia del recurso cuando se tenga como parámetro de regularidad constitucional un derecho humano reconocido en un tratado internacional, lo cierto es que dicha condicionante se desprende de la interpretación sistemática de los citados artículos 1º, párrafo primero, y 107, fracción IX, constitucionales, los cuales ya se encontraban vigentes al momento de la presentación de la demanda.
31. Por su parte, el criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad. En efecto, aquellas cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infraconstitucional, se encuadra como una cuestión de legalidad en la que lo relevante es desentrañar el sentido normativo de tales fuentes normativas<sup>31</sup>.
32. Lo precedente no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16, establece el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación “indirecta” a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Véase, por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 53/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. tomo VIII, Agosto de 1998, página 326, de rubro y texto: “**REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.** Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes”.

<sup>32</sup> Véase, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Cuarta Parte, página 179, de rubro y texto: “**REVISION. IMPROCEDENTE CONTRA**

33. Por lo tanto, para que se actualice una cuestión de constitucionalidad para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en un juicio de amparo directo, es necesario que en la sentencia recurrida se haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de normas generales o se establezca la interpretación directa de una norma constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio en la respectiva sentencia.
34. Por lo que hace al segundo requisito, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la procedencia del recurso se supedita constitucionalmente a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que emita el Tribunal Pleno.
35. Sobre este aspecto, debe entonces atenderse a lo que se precisa en la fracción II del punto Primero del Acuerdo Número 5/1999 antes citado, en virtud del cual, por regla general, se entiende que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre la cuestión de constitucionalidad hecha valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes (y no haya que suplir la deficiencia de la queja); o bien, en casos análogos.

---

**SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO DIRECTO POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO SE IMPUGNA UNA LEY LOCAL POR CONTRAVENIR UNA LEY FEDERAL, ASI COMO UN CONVENIO DE COORDINACION FISCAL.** De acuerdo con lo dispuesto por la fracción IX, del artículo 107 de la Constitución General, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo los casos previstos por las dos hipótesis contempladas en la fracción V, del artículo 83 de la Ley de Amparo, a saber cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley o cuando se haga una interpretación directa de un precepto constitucional, hipótesis en la que no se encuentra un caso en el que el problema resuelto por el Tribunal Colegiado no es de inconstitucionalidad de leyes propiamente dichos, sino de contradicción entre una ley local, por un lado, y una ley federal y un convenio de coordinación fiscal, por otro, no obstante que se aduzcan violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues éstos deben entenderse, en todo caso, como violaciones en vía de consecuencia”.

36. Finalmente, cabe mencionar que aunado a lo explicado en párrafos precedentes, esta Suprema Corte ha aceptado de manera excepcional la procedencia del recurso de revisión en un juicio de amparo directo cuando a través de este medio de impugnación extraordinario se objete la constitucionalidad de disposiciones de la Ley de Amparo.
37. Derivado de lo resuelto en el recurso de reclamación 130/2011 y el amparo directo en revisión 301/2013, fallados respectivamente por el Tribunal Pleno y la Primera Sala el veintiséis de enero de dos mil doce y el tres de abril de dos mil trece, se ha concluido que procede la revisión en amparo directo cuando se combata las disposiciones de la propia Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) se haya impugnado ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada, y c) la concurrencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Véase, la tesis 1a. CCXLI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 745, de rubro y texto: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO.** De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que: a) en la sentencia recurrida se realice un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado internacional o algún reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o habiéndose planteado, se omita su estudio y b) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de ésta, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, el 26 de enero de 2012, estableció que es susceptible de actualizarse la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo cuando se cuestione la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, pues a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, se ha desvanecido el obstáculo técnico que impedía conocer sobre su regularidad constitucional. Este planteamiento debe formularse en los recursos previstos en el juicio constitucional, ya que no es dable señalar como acto reclamado destacado en la demanda a la Ley de Amparo, ya que es hasta que se genere un acto de aplicación en perjuicio del particular cuando lo puede combatir. Así, en dichos casos, el órgano revisor no sólo se debe limitar a evaluar la regularidad de la decisión recurrida, sino también puede inaplicar la norma que sirvió de sustento cuando sea violatoria de algún derecho humano. Así, esta Primera Sala concluye, sobre la premisa de que el control constitucional es un elemento transversal a toda función jurisdiccional, que el recurso de revisión procede no sólo cuando exista una cuestión de constitucionalidad vinculada con la litis original, sino también cuando se combata la Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada”. Precedente: Amparo directo en revisión 301/2013. 3 de abril de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jorge Mario Pardo

38. Establecido lo anterior, y en atención al asunto que nos ocupa, se concluye que sí se cumplen con los requisitos desarrollados en el presente recurso, pues en la demanda de amparo se solicitó la interpretación de los artículos 16 y 20 constitucional y el Tribunal Colegiado del conocimiento llevó a cabo dicha interpretación. Además, el problema de constitucionalidad planteado entraña la posible fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, en virtud de que se solicitó la interpretación directa del artículo 16 constitucional en relación con la flagrancia delictiva, así como de la puesta a disposición sin demora a la Institución del Ministerio Público. Además, la interpretación constitucional solicitada sobre el artículo 20 constitucional entraña la posible fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia en relación con el momento en el cual debe hacerse saber a la persona detenida los motivos de su detención y sus derechos, incluido el de tener derecho a un abogado o abogada.
39. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que la decisión que emita podrá servir para continuar construyendo parámetros conforme a los cuales se deban resolver casos futuros en relación con el ámbito constitucional que rige a la aplicación de los artículos en mención.

## **VII. ESTUDIO DE FONDO**

40. Antes de iniciar el estudio del caso, corresponde, para efectos metodológicos, advertir que los agravios planteados por el quejoso se pueden dividir en: a) expresamente constitucionales, y b) agravios que constituyen temas de constitucionalidad aunque no necesariamente el quejoso lo haya planteado de forma expresa.
41. En ese sentido, el tema constitucional planteado expresamente por el quejoso corresponde a la interpretación del artículo 16 constitucional y, específicamente, la demora en la puesta a disposición y la interpretación de la razonabilidad del Tribunal Colegiado sobre el tiempo en que duró la

---

Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

puesta a disposición del quejoso ante el Ministerio Público [supra párr. 32 b), c), d) y e)].

42. Por otro lado, esta Primera Sala advierte que existen agravios que no se califican expresamente de constitucionales por el quejoso, pero que tienen dicha calidad en virtud de la argumentación realizada tanto en el recurso de revisión, como expresamente tratadas en los conceptos de violación.
43. En primer lugar, cabe resaltar que el quejoso hace mención a la alegada detención ilegal, en virtud de que no se habría configurado la flagrancia [supra párr. 32 a)]. De una lectura del recurso de revisión y de la demanda de amparo se desprende que dicho argumento, más allá de la posible inconformidad con la valoración probatoria hecha por la autoridad respecto de la flagrancia en el presente caso, está relacionado con la interpretación que se hace del término flagrancia y el momento en que se configura. Además, el Tribunal Colegiado destacó que la flagrancia en el presente caso “no sólo se realizó por el señalamiento informal de una persona que les dijo por azar acerca de su supuesta participación en el delito”, sino por la posesión de drogas. Es decir, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación constitucional sobre la figura de la flagrancia, añadiendo el señalamiento informal como parte de la configuración de la misma.
44. En segundo lugar, en el recurso de revisión, y aludiendo expresamente al artículo 20 constitucional, el quejoso plantea su “desacuerdo” con la valoración del Tribunal Colegiado sobre el hecho que sería correcto que hasta la declaración ministerial se leyeron al quejoso los derechos, se le advirtieron los cargos formulados y se le informó sobre su derecho a contar con un abogado [supra párr. 32 f), g) y h)]. Además, en los conceptos de violación el quejoso planteó la interpretación en el sentido que dicha información debe darse desde el momento de la detención y también sin demora. Esta Primera Sala observa que el agravio planteado está cuestionando la interpretación realizada por el tribunal colegiado sobre el artículo 20 constitucional. Más aún, el Tribunal Colegiado da respuesta a

través de una interpretación constitucional, no sólo respecto de la demora en la puesta a disposición, sino también sobre la alegada no afectación de dicha demora en el derecho de defensa del quejoso.

45. En relación con los dos temas anteriormente planteados, esta Sala reitera que son agravios abordados por el quejoso sin mencionar que implican cuestiones de constitucionalidad, aunque su argumentación conlleva lógicamente a la misma y, además, fueron abordados por el Tribunal Colegiado conocedor del amparo. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la Primera Sala considera necesario suplir la deficiencia de la expresión interpretación constitucional y perfeccionar el argumento, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones<sup>34</sup>.
46. Por otro lado, esta Sala considera que el agravio relativo a la violación a la presunción de inocencia, si bien fue hecho valer por primera vez en los agravios, está íntimamente relacionado con la interpretación del artículo 16 constitucional.
47. Finalmente, esta Sala considera que el agravio relativo a la necesidad de que los órganos jurisdiccionales actúen oficiosamente con fundamento en el nuevo paradigma del artículo 1º constitucional [supra párr. 32 j)] es inoperante por no haber sido planteado sino hasta el recurso de revisión y, además, no es clara la aplicabilidad que el quejoso pretende que dicho agravio tenga en el presente caso.
48. **Análisis constitucional.** Establecido lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a abordar los tópicos de constitucionalidad mencionados. Por cuestiones metodológicas, el análisis se hará de la siguiente manera: a) Flagrancia; b) Puesta a disposición ante

---

<sup>34</sup> Ver Amparo Directo en Revisión 1603/2011, resuelto en sesión de cuatro de noviembre de dos mil once, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío. Así como el Amparo Directo 5/2012, resuelto en sesión seis de febrero de dos mil trece, por mayoría de tres votos, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

el Ministerio Público; y c) Información sobre motivos de detención, y sobre los derechos del detenido.

#### **A. FLAGRANCIA**

49. Como se mencionó anteriormente, el quejoso consideró que, en el caso, no se habría configurado la flagrancia y añadió que tiene el derecho “de no ser aprehendido a manos del Estado por el solo hecho de que alguien lo ha señalado como delincuente, sin aportar datos concretos que pudieran corroborar esa situación” [supra párr. 30 c)].
50. Por su parte, el Tribunal Colegiado consideró que no se violaron los artículos 16 de la Constitución Federal ni 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en el caso “concurrió la flagrancia delictiva en la detención del enjuiciado” y añadió que la detención “no sólo se realizó por el señalamiento informal” de una persona que les dijo por azar acerca de su supuesta participación en el delito, sino que de las declaraciones de los agentes se desprende que existió la denuncia de que el quejoso se encontraba vendiendo drogas. Por tanto, los policías, “al darse a la tarea de buscarlo, lo hallaron; siendo que el activo, al verlos y ser interrogado, arrojó una mochila roja, la cual revisaron, encontrando dentro de ella tres blísteres de pastillas”. Por tanto, la detención del quejoso se llevó a cabo “en el momento mismo en que el encausado se hallaba cometiendo el delito”, es decir, cuando los policías “estaban sabedores de que en la mochila que el mismo portaba, se encontraban trece pastillas de clonazepam, cuya tenencia no pudo justificar legalmente el enjuiciado”.
51. Esta Primera Sala observa que de los conceptos de violación, de los agravios y de las consideraciones de la sentencia del Tribunal Colegiado surgen dos temas en relación con la flagrancia: a) si ésta se actualizó, y b) si los agentes policiales, con base en una denuncia de un hecho delictivo distinto, podían revisar al hoy quejoso.

52. Para abordar dichas cuestiones en el caso concreto, se considera necesario, de manera preliminar, referirse al derecho humano a la libertad personal, y en especial a una de sus limitaciones válidas, como es la flagrancia, para lo cual serán tomadas como base las principales consideraciones esgrimidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 105/2006-PS<sup>35</sup>, retomada posteriormente en el amparo en revisión 135/2011<sup>36</sup>, así como el amparo directo en revisión 2470/2011<sup>37</sup>.
53. En la contradicción referida se puntualizó que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos tuvo como finalidad crear y mantener las condiciones mínimas indispensables para asegurar el desarrollo de la vida del ser humano en libertad en condiciones compatibles con la dignidad humana.
54. Ahora bien, de conformidad con el texto constitucional y con los instrumentos internacionales ratificados por México, la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse en los casos y de acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución o la Ley. En caso contrario, estaremos ante una detención o privación ilegal de la libertad, que se encuentra prohibida tanto a nivel nacional como internacional.
55. En este orden de ideas, en nuestro sistema jurídico, las afectaciones a la libertad de los individuos sólo puede tener lugar en los casos y condiciones reguladas en la Constitución, en los tratados, y en las leyes, es decir, a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías.
56. Una de las formas constitucionalmente previstas para la privación de la libertad personal es la flagrancia, institución jurídica respecto la cual, esta

---

<sup>35</sup> Resuelta en sesión de Primera Sala correspondiente al quince de noviembre de dos mil seis, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

<sup>36</sup> Resuelto en sesión de Primera Sala correspondiente al seis de febrero de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

<sup>37</sup> Resuelto en sesión de Primera Sala correspondiente al seis de febrero de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversos pronunciamientos,<sup>38</sup> que serán retomados en el presente apartado.

57. Primeramente, es necesario destacar que el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, textualmente establece:

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

58. En la ejecutoria de referencia 2470/2011 se consideró que el escrutinio de la autoridad judicial debía ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones. Es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para privar de la libertad a un individuo, cumplía o no con las formalidades requeridas por la Constitución.
59. Mientras que el Ministerio Público tiene el deber de perseguir el delito y, por tanto, tiene interés en que las detenciones se ejecuten, la autoridad judicial tiene el llamado institucional de fungir como contrapeso, esto es, como tercero imparcial, capaz de invalidar las detenciones contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
60. La relevancia del tema obligó a la Primera Sala a buscar un concepto claro y orientador de lo que debía entenderse por flagrancia como supuesto de justificación a la limitación del derecho a la libertad personal. Sobre este punto en particular, derivado de un amplio estudio legislativo y bajo un método histórico progresivo se evidenció que el reconocimiento histórico del concepto de flagrancia -como supuesto que autoriza la “detención ciudadana” esto es, la detención ejecutada por particular- ha estado inmerso en el texto constitucional desde su redacción original en mil novecientos

---

<sup>38</sup> Sobre el particular, esta Primera Sala resolvió el Juicio de Amparo Directo 14/2011, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto en sesión de nueve de noviembre de dos mil once por Unanimidad de Votos. Así como el diverso Amparo Directo en Revisión 2480/2012, bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Resuelto igualmente por Unanimidad de Votos.

diecisiete e incluso, lo estuvo en la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete.

61. Así se puntualizó que desde mil novecientos noventa y tres, hasta antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional disponía lo siguiente:

(...) En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público (...)

62. Actualmente, el quinto párrafo del artículo 16 constitucional -reformado en junio de dos mil ocho- prevé la siguiente descripción:

(...) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención (...)

63. De lo anterior se desprende que si bien la figura siempre ha estado recogida por el texto constitucional, fue hasta la reforma de dos mil ocho en que se introdujo por primera vez una definición del concepto.

64. Por tanto, se puntualizó que un delito flagrante se configura cuando se está cometiendo actual y públicamente, esto es, cuando el autor es visto y sorprendido por muchos testigos mientras consuma la acción, sin que pueda huir. Como criterio negativo tenemos que, en forma ejemplificativa, de acuerdo con esa interpretación de esta Suprema Corte, una detención en flagrancia no es aquella en la que se detiene con fundamento en una simple sospecha sobre la posible comisión de un delito. Así pues, la connotación del término flagrancia tiene un sentido realmente restringido y acotado, desde luego, en un claro favorecimiento del alcance del tantas veces citado derecho a la libertad personal.

65. En la ejecutoria de referencia 2470/2011 se mencionó que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho obedeció a la intención expresa de delimitar un concepto de flagrancia, para erradicar la posibilidad de cometer abusos. Así, a partir de esa reforma, se determinó que el significado de la flagrancia había readquirido un sentido literal y restringido, donde lo que flagra es lo que arde o resplandece como fuego o llama<sup>39</sup>.
66. Bajo este contexto interpretativo se determinó que un delito flagrante es el que brilla a todas luces, es decir, que es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Se afirmó que para reconocerlo no se necesitaba ser juez, perito en derecho o bien, el estar especialmente capacitado. Dicho en otras palabras, se afirmó que la obviedad inherente a la flagrancia tenía una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor.
67. De este modo, se entendió que la flagrancia era siempre una condición que se configura antes de la detención. Esto implica que la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial. Por otra parte, se afirmó que tampoco se podía detener para investigar.
68. Si la persona no era sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no era admisible que la autoridad aprehensora detuviera al inculpado y después intentara justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito.
69. Por ende, se concluyó, de manera genérica, que una “actitud sospechosa”, nerviosa o a cualquier otro motivo relacionado con la apariencia de una

---

<sup>39</sup> De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo flagrar significa arder o resplandecer como fuego o llama.

persona, no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto flagrancia, ya que éste siempre tenía implícito un elemento sorpresa tanto para los particulares que son testigos, como para la autoridad aprehensora. En contraste, cuando no hay ese elemento sorpresa –porque ya se ha iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona– la detención requerirá estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión. Además, tal como se destacó en el amparo directo en revisión 3463/2012, una detención en flagrancia no es aquella en la que se detiene con fundamento en una simple sospecha sobre la posible comisión de un delito<sup>40</sup>.

70. Congruente con lo anterior, esta Primera Sala enfatizó en las ejecutorias referidas que, para que la detención en flagrancia pudiera ser válida, tendría que darse alguno de los siguientes supuestos:

a) La autoridad puede aprehender /al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el *iter criminis*.

b) La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado.

71. Además, se afirmó que el juez que ratifica una detención en la que no era necesario esperar una orden de aprehensión debía conducirse de acuerdo con el espíritu de la reforma constitucional a la que se ha hecho referencia.

72. Esta Primera Sala determinó que el control judicial posterior a la privación de la libertad en flagrancia debe ser especialmente cuidadoso y que el juez debía ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes

---

<sup>40</sup> Amparo directo en revisión 3463/2012, Ministro Ponente José Ramón Cossío. Secretario Julio Veredín Serna.

que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada. Pero además se afirmó que debía evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de los datos aportados por la denuncia.

73. En suma, esta Sala concluyó que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la detención debía poderla defender ante el juez. Como cuestión importante, se enfatizó que el principio de presunción de inocencia se proyectaba desde esa etapa del procedimiento (detención). Por tanto, quien afirma que la persona capturada fue sorprendida en flagrancia tiene la carga de la prueba. Así, el escrutinio posterior a la detención se consideró de suma importancia, ya que el descubrimiento de que se actualizó una situación de privación ilegal de la libertad, necesariamente debía desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondan.

74. Por otro lado, en el amparo directo 14/2011, la Primera Sala dio lineamientos generales sobre lo que tiene que hacer una autoridad policial cuando tiene conocimiento, mediante una denuncia informal<sup>41</sup>, del hecho que en un lugar se esté cometiendo o se acabe de cometer un delito en flagrancia. Los lineamientos referidos son los siguientes:

- a) Cuando la policía recibe información que en un lugar público se está cometiendo o se acaba de cometer un delito, debe —inmediatamente y de ser posible— informar a la autoridad ministerial para que ésta, con los elementos de información que tenga disponibles, solicite a la autoridad judicial que libre una orden de aprehensión contra quienes sean señalados como probables responsables. El agotamiento de

---

<sup>41</sup> Se refiere a aquellas denuncias que no se rinden ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente. Como ejemplos de denuncias informales tenemos: llamadas a la policía (anónimas o no) de particulares que son víctimas o testigos del delito; o aquellas denuncias de testigos o víctimas que se realizan directa y presencialmente ante la policía y que también versan sobre hechos delictivos recién cometidos o que se están cometiendo.

esta acción siempre debe ser favorecido, con base en el principio de excepcionalidad de las detenciones no autorizadas judicialmente<sup>42</sup>.

b) Ahora bien, por la urgencia que caracteriza a las circunstancias descritas y con fundamento en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional<sup>43</sup>, no es necesario que la policía espere la autorización judicial para desplegarse hasta el lugar de los hechos para detener la comisión del delito y aprehender al sujeto activo.

75. Posteriormente, en el amparo directo en revisión 3463/2012, la Primera Sala analizó las condiciones que podrían justificar un acto de molestia para el individuo –lo que llamó control preventivo provisional– y que, con base en dicho acto, se dé una detención en flagrancia.

76. Al respecto, destacó dos condiciones diferentes que podrían justificar dicho control:

a) un señalamiento por denuncia informal<sup>44</sup> de que la persona esté cometiendo un delito, el cual no es objetivamente visible, sino que es descubierto con motivo del acercamiento que tiene la policía hacia el individuo, y

---

<sup>42</sup> Al respecto, el artículo 274 del Código Federal de Procedimientos Penales dice:

Artículo 274. Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará una acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:

I.- El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno u otra;

(REFORMADA, G.O. 3 DE MAYO DE 1999)

II.- Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se refieran al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad de sus autores; cómplices o encubridores, y

III.- Las medidas que dictaren para completar la investigación.

<sup>43</sup> Esto no torna irrelevante el deber de informar, cuando sea posible, al Ministerio Público de los datos denunciados, pues a partir de ese momento éste puede iniciar una investigación, relacionar datos y empezar a investigar de modo eficiente y veloz.

<sup>44</sup> Como ejemplos de denuncias informales se tienen las siguientes: llamadas a la policía (anónimas o no) de particulares que son víctimas o testigos del delito; o aquellas denuncias de testigos o víctimas que se realizan directa y presencialmente ante la policía y que también versan sobre hechos delictivos recién cometidos o que se están cometiendo; es decir, se refiere a todas aquellas denuncias que no se rinden ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente.

- b) que el comportamiento del individuo dé lugar a una “sospecha razonada” de que está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Dentro de este supuesto se incluyó el comportamiento inusual de las personas, como las conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía, así como cualquier otro comportamiento que razonablemente pueda ser interpretado dentro de determinado contexto como preparatorio para la comisión de algún delito.

77. En este contexto, la Primera Sala analizó los parámetros constitucionales bajo los cuales deben llevarse a cabo dichos controles, para posiblemente realizar detenciones por delitos cometidos en flagrancia:

a) Los controles preventivos provisionales se realizan para:

- i. prevenir algún posible delito;
- ii. salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiales, o
- iii. corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía.

b) La finalidad de dichos controles no es encontrar pruebas de la comisión de algún delito.

78. La Primera Sala consideró que dicho estándar excluye la posibilidad de que una autoridad pueda detener a una persona sin una causa razonable mínima que lo justifique, pues de lo contrario, se justificaría que por cualquier circunstancia abstracta –como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse– pueda ser detenido y sujeto a revisión, cuando no es evidente que existen circunstancias objetivas que permitan justificar la sospecha razonada de que se está cometiendo un delito. De lo contrario, la detención sería un acto notoriamente inconstitucional.

79. Si tras un control provisional preventivo legítimo los agentes policiales advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita y, en consecuencia, lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.
80. En el amparo directo en revisión 1596/2014, la Primera Sala continuó desarrollando el anterior estándar. Al respecto destacó que el derecho a la libertad personal no es absoluto<sup>45</sup>. Consecuentemente, aunque este control preventivo provisional no tiene un sustento expreso en el texto constitucional, deriva de las facultades que tienen los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás y, por ende, prohibidas por el ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal<sup>46</sup>.
81. La intención de la Suprema Corte en destacar la existencia de dicho control preventivo provisional fue clarificar las restricciones provisionales permitidas al ejercicio de derechos humanos como la libertad personal y bajo qué condiciones se justifican, ya que invariablemente la conducta de un elemento de policía o de seguridad pública incidirá o afectará momentáneamente en esa libertad o libertades y en el goce de otros derechos interdependientes como puede ser el de propiedad, libre circulación o intimidad.

---

<sup>45</sup> Los párrafos 74 a 87 corresponden a las consideraciones del amparo directo en revisión 1596/2014. Primera Sala. Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez, decidido el tres de septiembre de dos mil catorce.

<sup>46</sup> En el Caso Cabrera y Montiel vs. México, la Corte Interamericana estableció que: “(...) si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”. Cfr., Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 87. Ver también Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 174; Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 111, y Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 86.

82. Se destacó en dicho precedente que las restricciones provisionales son afectaciones momentáneas al ejercicio de un derecho que no es absoluto; por lo tanto, aun cuando no se encuentre prevista expresamente cierta restricción provisional en el texto constitucional, es legítima desde el punto de vista constitucional cuando se realice en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal y siempre y cuando se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y de concurrencia de una sospecha razonable. En otras palabras, si bien todas las personas gozan de los derechos humanos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestado en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, entre otros, como cualquier otro derecho humano, el ejercicio de los mismos puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad al no ser absolutos.
83. En ese sentido, la Primera Sala destacó que la Constitución Federal señala que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. A este accionar el texto constitucional lo denomina como “detención”, que en realidad se puede considerar como un sinónimo de “arresto”. Como se mencionó, la detención ocurre cuando una autoridad o cualquier otra persona, ante la actualización de una conducta delictiva flagrante, ejerce las potestades conferidas constitucionalmente para privar a una persona de su libertad personal y deambulatoria (en algunos casos a través del uso de la fuerza), con el objetivo de ser presentado ante la autoridad correspondiente o ante el ministerio público.
84. Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede o debe catalogarse como una detención. Las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, por lo que necesariamente existe algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país que no actualiza el supuesto de detención.

85. Así, para efectos del control preventivo provisional y siguiendo la línea argumentativa del citado amparo directo en revisión 3463/2012, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple intermediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o de prevención del delito; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en estricto sentido.
86. El primer nivel de contacto no requiere de justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Este supuesto se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace ciertos tipos de preguntas, sin ejercer ningún medio coactivo y bajo la suposición de que dicha persona se puede retirar en cualquier momento.
87. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción provisional debe ser excepcional y se admite únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones, de acuerdo a los lineamientos expuestos en el referido amparo directo en revisión 3463/2012.
88. Al respecto, esta restricción a la libertad personal tiene que estar plenamente justificada en aras de que se fundamente a partir del artículo 21 constitucional; es decir, en un Estado constitucional de Derecho como el mexicano, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio, a saber, de la libertad deambulatoria, sin razones objetivas que sustenten tal afectación en el ejercicio del derecho.
89. Así, la restricción temporal a la libertad deambulatoria de una persona y sus derechos interdependientes puede justificarse, en algunos casos, en la actualización de infracciones administrativas (como podría ser la violación al

reglamento de tránsito) o en la concurrencia, a juicio de la autoridad, de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva.

90. Adicionalmente, esta restricción provisional puede darse en un grado menor o mayor de intromisión, dependiendo de las circunstancias del caso, tal como se expuso en el amparo directo en revisión 3463/2012. Será mayor cuando la autoridad aprecie de las situaciones fácticas que, por ejemplo, su integridad física corre algún peligro al momento de restringir provisionalmente la libertad de un sujeto o que esta persona resulta violenta o intente darse a la fuga, lo cual lo facultará para realizar sobre la persona y/o sus posesiones o propiedades un registro o revisión más exhaustiva, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito.
91. Por el contrario, la restricción provisional del ejercicio del derecho humano será menos intrusiva si actualizada la sospecha razonable, no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro, por lo que estarán facultados para llevar a cabo solamente una revisión ocular superficial y exterior de la persona y/o de sus posesiones o propiedades.
92. Cabe recalcar que para acreditar la existencia de esta suposición razonable, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado de manera consciente y libre; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación<sup>47</sup> por parte de los agentes de policía<sup>48</sup>. Para el primer supuesto, dicha información tendrá que cumplir con criterios de

---

<sup>47</sup> Véase, la interpretación del concepto de consentimiento plasmada en el amparo directo en revisión 2420/2011, página 28. Si bien es cierto deriva de un caso relacionado con la inviolabilidad del domicilio, dicha conceptualización parte de una interpretación del artículo 16, primer párrafo, constitucional y evidencia una preocupación de la Primera Sala de esta Suprema Corte por evitar todo posible acto de coacción a la voluntad libre de una persona.

<sup>48</sup> Es importante resaltar que una conducta evasiva a las peticiones de una autoridad no puede considerarse, *per se*, como una sospecha razonable que justifica un control preventivo provisional, dado que el hecho de que una persona invoque o haga valer su derecho a la propiedad o intimidad, entre otras libertades, no significa forzosamente que esté llevando a cabo una conducta ilícita, sino que está en posición de exigir el respeto a su respectivo derecho humano.

razonabilidad y objetividad; a saber, deberá ser suficiente bajo el criterio de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la autoridad si hubiere contado con tal información.

93. Lo anterior será diferente en cada caso concreto y dependerá de los hechos y circunstancias presentes al momento de decidir efectuar la restricción temporal de la libertad personal y de otros derechos interdependientes. Por tanto, no deben confundirse los citados niveles de actuación de la autoridad de seguridad pública, pues habrá situaciones en que restricciones temporales a la libertad personal se conviertan en detenciones, al verificarse en el momento de la restricción la actualización de una conducta delictiva, mientras que en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista detención. Hasta aquí el precedente citado<sup>49</sup>.
94. Ahora bien, una vez que esta Primera Sala ha establecido el concepto, naturaleza jurídica, alcances y procedencia de la figura de la flagrancia delictiva como causa legal o justificada para proceder a la detención de una persona, es necesario analizar si en el caso concreto fueron o no cumplidos los precitados requisitos que condicionan la validez constitucional de la detención del quejoso.
95. En relación con la primera cuestión, es decir, si se actualizó la hipótesis constitucional de la flagrancia, esta Primera Sala considera que de las piezas que obran en el expediente se desprende que la figura de la flagrancia respecto del delito de posesión de drogas se actualizó al momento en que los policías se percataron que el quejoso portaba las pastillas de clonazepam, cuya tenencia no pudo justificar legalmente el enjuiciado.
96. Así, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, su detención no estuvo motivada por una simple “denuncia al azar”, sino por el hecho no

---

<sup>49</sup> Los párrafos 74 a 87 corresponden a las consideraciones del amparo directo en revisión 1596/2014. Primera Sala. Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez, decidido el tres de septiembre de dos mil catorce.

controvertido por las declaraciones de los policías, del quejoso y de un testigo, de que en la mochila del quejoso se encontraron unas pastillas de droga. Por tanto, se actualizó la hipótesis normativa de la flagrancia delictiva del delito de posesión, en términos del analizado artículo 16 constitucional.

97. Por tratarse de un amparo directo en revisión y por ser una cuestión de legalidad, esta Primera Sala no analizará la valoración probatoria de la forma en que dichas drogas llegaron a la mochila.
98. Ahora bien, corresponde referirse a la segunda cuestión planteada, a saber, si los agentes policiales, con base en una denuncia de un hecho delictivo distinto, podían revisar al hoy quejoso. De los conceptos de violación se desprende que el quejoso cuestiona, más allá de la valoración sobre la posesión en sí de las pastillas, el hecho que los policías se le hubieran acercado y hubieran revisado sus pertenencias con base en una denuncia “al azar” realizada por otra persona. Además, el Tribunal Colegiado destacó que la flagrancia en el presente caso “no sólo se realizó por el señalamiento informal de una persona que les dijo por azar acerca de su supuesta participación en el delito”, sino por la posesión de drogas; es decir, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación constitucional sobre la figura de la flagrancia, añadiendo el señalamiento informal de un tercero como parte de la configuración de la misma.
99. De las constancias en autos se desprende que los policías municipales se acercaron al quejoso por cumplir éste con la descripción física –de la ropa que vestía– dada momentos antes a los policías por una tercera persona y quien había manifestado que el individuo con las características físicas descritas se encontraba vendiendo drogas.
100. Ahora bien, no está en controversia el hecho que, cuando los policías se acercaron al hoy quejoso, éste no se encontraba vendiendo drogas, se encontraba solo y los policías le solicitaron revisar su mochila. Las

declaraciones policiales afirman que el quejoso les aventó la mochila y la declaración del quejoso y del testigo indican que le fue arrebatada por los policías ministeriales. El Tribunal Colegiado concluyó que el quejoso les aventó la mochila.

101. Si bien no corresponde a esta Sala hacer la valoración probatoria sobre los hechos específicos que dieron origen al caso, sí le corresponde analizar si:

a) la denuncia de una persona forma parte de los elementos de flagrancia; y

b) el abordamiento a una persona por una denuncia sobre la aparente comisión flagrante de un delito (en este caso la alegada venta de drogas), permite a la autoridad, una vez encontrada la posible persona señalada y en el supuesto de no estar cometiendo delito alguno en dicho momento, revisar físicamente a dicha persona.

102. En relación con la primera interrogante, y atendiendo al desarrollo que se hizo de los elementos de la flagrancia, resulta claro que la denuncia de una persona al azar no es, conceptualmente hablando, parte de los requisitos de la flagrancia. Tal como ha sido abordado previamente, el significado de la flagrancia tiene un sentido literal y restringido, donde lo que flagra es lo que brilla a todas luces, es decir, que es tan evidente e inconfundible que cualquier persona es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de estar en presencia de una conducta prohibida por la ley.

103. De los autos del presente caso se desprende que una persona denunció ante los policías la alegada venta de droga por un individuo. Dicha denuncia se dio en un lugar distinto a donde alegadamente se llevaba a cabo el hecho delictivo. Además, consta en autos que cuando los policías llegaron al lugar de los hechos, no se estaba llevando a cabo el delito denunciado. No fue sino hasta posteriormente, con la revisión de la mochila del quejoso, que la policía se encontró ante el delito flagrante de posesión de drogas.

104. Por tanto, esta Primera Sala observa que el Tribunal Colegiado realizó un análisis constitucional equivocado sobre los requisitos de la flagrancia al incluir la denuncia como requisito de la misma. No obstante lo anterior, tal como se manifestó anteriormente, existen los elementos suficientes y claros para concluir que se estuvo en presencia de un delito flagrante de posesión de droga, cuya restricción provisional de la libertad previa e injerencia a la intimidad estuvo justificada, tal como se desarrollará más adelante. En virtud de ello, el agravio relativo a la flagrancia del delito de posesión de droga es fundado pero inoperante.
105. Ahora bien, corresponde referirse a la segunda interrogante, a saber, si el abordamiento a una persona por una denuncia sobre la aparente comisión flagrante de un delito permite a la autoridad, una vez encontrada la posible persona señalada y en el supuesto de no estar cometiendo delito alguno en dicho momento, revisar físicamente a dicha persona.
106. Esta Primera Sala considera que los individuos tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de autoridades. Existe, en la Constitución federal, una preocupación de proteger la privacidad que se manifiesta en distintos preceptos constitucionales<sup>50</sup>. En dichos casos, la intimidad como derecho humano tiene distintos niveles de protección, dependiendo si el Estado se constituye como garante o protector del mismo frente a la sociedad o si, por el contrario, debe ser garante frente a su propia actividad, resultando relevante qué tipo de actividad se trata.
107. En el presente caso, resulta relevante el artículo 16 constitucional que establece que “(n)adie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Además, mediante el mandato de incorporación del artículo 1 constitucional, como lo ha sostenido la Corte, es necesario destacar las

---

<sup>50</sup> Como, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio del artículo 16, el derecho de asociación del artículo 9, el de la protección del goce de los bienes, posesiones y libertades mediante el debido proceso en el artículo 14, etc.

normas convencionales relevantes, pues integran un mismo parámetro de regularidad constitucional. En ese sentido, el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “(n)adie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.”

108. En el presente caso, el derecho a la intimidad se encuentra íntimamente relacionado con el de libertad personal. Tal como se ha destacado, el presente punto se limita a determinar si era válido que los agentes policiales acudieran al lugar donde alegadamente se estaría cometiendo un delito de conformidad con una denuncia informal y si, una vez ahí y no estando cometándose ningún delito, era válido que los policías revisaran a la persona que cumplía con la descripción física de la persona que alegadamente estaba, momentos antes, cometiendo un ilícito.

109. Al respecto, si bien los individuos tienen el legítimo derecho de preservar un grado de privacidad frente a las autoridades, el Estado también tiene la tarea de proteger a las personas en su territorio y garantizar los derechos humanos de todos. Estas situaciones no son contrarias entre sí.

110. En el caso de *Cabrera y Montiel contra México*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que:

(...) si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción<sup>51</sup>.

111. De los párrafos anteriores se desprende que toda persona tiene no sólo la legítima expectativa, sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Lo anterior tiene la finalidad de evitar abusos

---

<sup>51</sup> Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 87. Ver también *Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 174; *Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 111, y *Caso Servellón García y otros vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 86.

por parte de la autoridad. Por tanto, el estándar en la limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y del más estricto rigor. Por ello, corresponderá probar a la autoridad que tenía elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal<sup>52</sup>.

112. En el citado amparo directo en revisión 3463/2012, la Primera Sala analizó las condiciones que podrían justificar un acto de molestia para el individuo – lo que llamó control preventivo provisional– y que, con base en dicho acto, se dé una detención en flagrancia. Un supuesto que podría justificar dicho control es el señalamiento por denuncia informal de una persona de que otra esté alegadamente cometiendo un delito, el cual no es objetivamente visible, sino que es descubierto con motivo del acercamiento que tiene la policía hacia el individuo. Asimismo, en el amparo directo en revisión 1596/2014 se destacó que para acreditar la existencia de esta suposición razonable, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado de manera consciente y libre; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación<sup>53</sup> por parte de los agentes de policía<sup>54</sup>.

113. En el presente caso, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Colegiado, los policías se acercaron a la persona que cumplía con la descripción física dada por la denuncia informal y, al preguntarle si lo podían

---

<sup>52</sup> Amparo en revisión 703/2012. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del Engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda. Resuelto en sesión de 6 de noviembre de 2013.

<sup>53</sup> Véase, la interpretación del concepto de consentimiento plasmada en el amparo directo en revisión 2420/2011, página 28. Si bien es cierto deriva de un caso relacionado con la inviolabilidad del domicilio, dicha conceptualización parte de una interpretación del artículo 16, primer párrafo, constitucional y evidencia una preocupación de la Primera Sala de esta Suprema Corte por evitar todo posible acto de coacción a la voluntad libre de una persona.

<sup>54</sup> Es importante resaltar que una conducta evasiva a las peticiones de una autoridad no puede considerarse, *per se*, como una sospecha razonable que justifica un control preventivo provisional, dado que el hecho de que una persona invoque o haga valer su derecho a la propiedad o intimidad, entre otras libertades, no significa forzosamente que esté llevando a cabo una conducta ilícita, sino que está en posición de exigir el respeto a su respectivo derecho humano.

revisar, éste habría arrojado la mochila que llevaba, la que fue objeto de registro por los agentes y en la cual encontraron la droga. Así pues, el supuesto del presente caso es la entrega voluntaria del objeto de la revisión de una persona que fue sujeta a un acto de molestia con base en una denuncia informal. En consecuencia, el agravio relacionado es infundado.

114. No pasa desapercibido para esta Sala que la denuncia informal se realizó por diverso alegado delito (venta de drogas) que por el que se detuvo al quejoso (posesión de drogas). Al respecto, se observa que, por un lado, el control preventivo estaba justificado con base en la denuncia informal y, además, el propio quejoso voluntariamente habría consentido la revisión.

115. Finalmente, como se ha destacado, si bien la determinación de si el quejoso entregó voluntariamente su maleta a los policías o si éstos se la habrían arrebatado constituye, *prima facie*, un análisis de legalidad que corresponde al Tribunal Colegiado, esta Primera Sala observa, como tema de apreciación constitucional, que el análisis sobre los requisitos de la flagrancia y respecto de las posibles excepciones para realizar una revisión física a la persona y pertenencias de alguien, en este caso, debe realizarse con un escrutinio estricto y tomando en consideración la totalidad de los elementos conducentes y no basarse únicamente en declaraciones contradictorias entre los policías y la persona inculpada. En todo caso, esta Primera Sala recuerda que corresponde a la autoridad acreditar el hecho delictivo imputado bajo cualquier supuesto, lo que tiene estrecha relación, además, con el principio de presunción de inocencia.

**B. PUESTA A DISPOSICIÓN SIN DEMORA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO**

116. El estudio de constitucionalidad del presente apartado se sustentará en los razonamientos que esta Primera Sala emitió al resolver el Amparo Directo en Revisión 2470/2011<sup>55</sup>, cuyo contenido es aplicable al presente asunto.

117. En dicho precedente, se determinó que el artículo 16 constitucional consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las

---

<sup>55</sup> Resuelto en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

cuales destaca el derecho a la libertad personal. Por tanto, se consideró que la estructura de dicho precepto constitucional se traducía en dos formas distintas de proteger los derechos:

a) Los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente<sup>56</sup> y,

b) Los párrafos subsecuentes señalan las posibles limitaciones a las mismas; es decir, se refirió a los supuestos en que el Estado puede limitar válidamente ese derecho y bajo qué condiciones. Posteriormente se afirmó que el Estado no podía limitar tales derechos en supuestos distintos a los previstos por la Constitución.

118. Asimismo, se hizo referencia al contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prohíbe las afectaciones al derecho a la libertad personal salvo por las condiciones y causas previa y expresamente contempladas por la propia Constitución. Dicho precepto establece que:

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

119. Posteriormente, una vez que esta Primera Sala delimitó el concepto de “flagrancia” en la citada ejecutoria, reiteró que éste obedeció a la intención de favorecer el derecho a la libertad personal. Así, este Alto Tribunal determinó que el control judicial *ex post* a la privación de la libertad en flagrancia debía ser especialmente cuidadoso. Por ende, se concluyó que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención debe poder defenderla ante el juez respectivo.

---

<sup>56</sup> Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

120. Además, enfatizó que el principio de presunción de inocencia se proyectaba desde las primera etapas del procedimiento penal (detención). Por tanto, quien afirma que la persona capturada fue sorprendida en flagrancia tiene la carga de la prueba. El escrutinio posterior a la detención se consideró de suma importancia, ya que el descubrimiento de la actualización de una situación de privación ilegal de la libertad, necesariamente debía desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondan.
121. Específicamente en relación con el derecho de “puesta a disposición ministerial sin demora” esta Primera Sala determinó que dentro del régimen general de protección contra detenciones que exige la Constitución se podía derivar la existencia de un principio de inmediatez, por el cual era exigible que la persona detenida fuera presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que **la persona debía ser puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas.**
122. Para dichos efectos, esta Primera Sala consideró que no era posible (ni adecuado) fijar un determinado número de horas, ya que fijar una regla con dichas características podría abarcar casos en los que las razones que dan lugar a la dilación fueran justificadas. Sin embargo, el hecho de que no sea posible ni recomendable adoptar una regla fija, no implicó que no hubiera sido posible adoptar un estándar que posibilite al juez o la jueza calificar cada caso concreto tomando en consideración dos necesidades:
- a) No dilatar injustificadamente la puesta a disposición de la persona detenida, porque esto da lugar a que se restrinja la libertad personal sin control y vigilancia del Estado y,
  - b) Tomar en consideración las peculiaridades de cada caso concreto, por ejemplo, la distancia que existe entre el lugar de la detención y la agencia del Ministerio Público.
123. De este modo se afirmó que el hecho que no pudiera existir una regla tasada, no quería decir que no pudiera haber un estándar que guiara al

juzgador a determinar cuando está frente a una dilación indebida. Esta Sala consideró que tal circunstancia se actualizaba siempre que no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica.

124. Tales motivos razonables únicamente podían tener origen en impedimentos fácticos reales y comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y el lugar de la puesta a disposición). Además, dichos motivos debían ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Dicho de otro modo, en cuanto fuera posible, era necesario llevar a la persona detenida por flagrancia o caso urgente ante el Ministerio Público, a menos que existiera un impedimento razonable que no resultara contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía.

125. Finalmente, se afirmó que lo anteriormente expuesto implicaba que la policía no podía retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público para ponerlo a disposición ante quien debían desarrollarse las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas que permitieran definir su situación jurídica. Por tanto, esta Primera Sala concluyó que la policía no podía simplemente retener a una persona, sin informarlo a la autoridad ministerial para obtener su confesión o información relacionadas con la investigación que realizan, para inculparlo a él o a otras personas. Es decir, en términos estrictamente constitucionales se determinó que las autoridades tenían obligación de poner al detenido “sin demora”, sin retraso injustificado o sin demora irracional ante el Ministerio Público, en caso de delito flagrante o ante el juez que hubiera ordenado la aprehensión del detenido.

126. Ahora bien, una vez que esta Primera Sala con base en el precedente citado ha establecido cuál es la correcta interpretación del principio de immediatez que se desprende de los términos “sin dilación” y “sin demora” – previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional–

procede a analizar si en el caso concreto fue o no cumplido el precitado requisito de inmediatez que condiciona la validez constitucional de la detención del quejoso.

127. En virtud de lo anterior, contrario a lo afirmado por el Tribunal Colegiado, no se desprende que las tres diligencias policiales referidas en el fallo de veintitrés de noviembre de dos mil doce justificaran las seis horas que tardaron los agentes policiales en ponerlo a disposición del Ministerio Público. Por tanto, se advierte una violación al texto del artículo 16 constitucional.

128. La conclusión surge de los siguientes elementos referidos en la sentencia del Tribunal Colegiado:

a) La detención se dio en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde se encuentra el Ministerio Público, es decir, no existía un factor de distancia en el presente caso;

b) El quejoso fue detenido a las 13:20 horas y llevado a un examen médico a las 13:25 horas –cinco minutos después– diligencia que, además, no le corresponde a la policía, sino al Ministerio Público;

c) El artículo 50 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de Mérida, fracción XX, inciso d) establece como obligación del director de la misma “Remitir a las autoridades competentes a las personas detenidas como probables responsables en la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, en términos del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; es decir, dicha norma obliga al director de la Policía a poner a disposición inmediata al detenido de conformidad con el texto constitucional.

d) No se aprecia la complejidad –ni el Tribunal Colegiado lo valora– de la diligencia de registro realizado por uno de los dos policías que

realizaron la detención de la cadena de custodia de la mochila del quejoso que contenía las pastillas de clonazepam.

129. El Tribunal Colegiado, si bien mencionó el factor temporal y las condiciones de disponibilidad de recursos humanos y materiales haciendo referencia específica al caso 2470/2011, no realizó un análisis de aplicación de los mismos, sino que se limitó a mencionar, de forma genérica, que era “justificado a partir de un examen de razonabilidad de la actuación administrativa” de la policía, la cual debía cumplir con sus obligaciones legales –sin siquiera mencionarlas ni analizarlas. En ese sentido, esta Primera Sala destaca que no basta con hacer referencia a un precedente para validar una interpretación constitucional.
130. Tal como se precisó con antelación, existe un principio de inmediatez en el texto constitucional, por el que resulta exigible que todo individuo detenido por la autoridad deba ser presentado ante el Ministerio Público lo antes posible. Es decir, la persona debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas y tomando en consideración impedimentos fácticos comprobables, como la distancia entre el lugar de la detención y la agencia ministerial.
131. De conformidad con los anteriores lineamientos, esta Primera Sala advierte que el intervalo de seis horas transcurrido desde el momento de la detención del quejoso, hasta que finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público, no se encuentra justificado. En consecuencia, el agravio referente es fundado.
132. En relación con lo anterior, debe decirse que los efectos de una retención injustificada impactan directamente en las pruebas obtenidas en dicho intervalo, por lo que las mismas deben ser consideradas inválidas. Asimismo, la retención injustificada podría impactar en la cadena de custodia de pruebas obtenidas en la detención de la persona. En virtud de lo anterior, cuando se considere, como en el presente caso, que la retención de una persona ha sido injustificada, el operador judicial debe de realizar un

análisis detallado para determinar cuáles son las pruebas que deben considerarse inválidas y para dilucidar si, en el caso concreto, la cadena de custodia se ha visto afectada y de qué forma.

**C. INFORMACIÓN SOBRE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS CON LOS QUE CUENTA EL DETENIDO**

133. Corresponde ahora analizar el planteamiento constitucional en relación con la interpretación del artículo 20 de la Constitución y el momento a partir del cual se debe informar al detenido de las razones de su detención y de los derechos que le asisten.
134. Como se ha mencionado, el Tribunal Colegiado ha considerado que, en el presente caso, no se ha vulnerado el artículo referido en virtud de que el Ministerio Público informó al quejoso sobre los motivos de su detención, así como de sus derechos, incluido el derecho de contar con un abogado “durante la declaración ministerial”; es decir, la interpretación que el Tribunal Colegiado hace sobre el artículo 20 constitucional es que es hasta la declaración ministerial –y no antes– que se debe informar al detenido sobre los motivos de su detención y demás derechos, incluido aquel de contar con un abogado.
135. Además, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación constitucional al establecer que el tiempo transcurrido en poner al quejoso a disposición del Ministerio Público (seis horas) “no influyó en su debida defensa”, ya que el agente del Ministerio Público le hizo saber sus derechos “al momento de recibirle su declaración ministerial”.
136. Por su parte, el quejoso disiente de la interpretación del Tribunal Colegiado y considera que los derechos mencionados, protegidos en el artículo 20 constitucional, deben hacerse efectivos “desde el momento de la detención” y no durante la declaración ministerial.
137. Con la finalidad de establecer los lineamientos que sustentan la interpretación constitucional de esta Primera Sala en torno al derecho

fundamental de ser informado de las razones de la detención, se estima conveniente hacer referencia al artículo 20, apartado A, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente hasta antes de la implementación del sistema penal acusatorio bajo los lineamientos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; texto que ha establecido lo siguiente:

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado:

II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.

III.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.

138. Cabe destacar que el texto constitucional ha sido modificado con motivo de la reforma penal constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. No obstante, la vigencia de la reforma está supeditada a la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, bajo los lineamientos establecidos en la propia reforma constitucional.

139. El nuevo texto a implementarse correspondiente al tema en estudio por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en el inciso B, numerales II y III, que toda persona imputada de un delito tiene derecho:

[...] II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. [...] (resaltado fuera del original).

140. A partir de esta reforma constitucional, el legislador permanente estableció que la persona detenida tiene derecho a que se le hagan saber, desde el momento de su detención, sus derechos, incluyendo el motivo de la misma. Asimismo, se establece que dicha información debe darse tanto al momento de su detención, como ante el ministerio público y el juez.

141. Respecto a esta última reforma constitucional, es importante enfatizar que su entrada en vigor está supeditada al cumplimiento de condiciones formales y materiales establecidas en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de publicación que establece, por un lado, que el sistema procesal penal acusatorio previsto, entre otros en el artículo 20 constitucional, “entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente” de la publicación del referido Decreto; y por otro lado, establece que sin perjuicio de lo previsto anteriormente, dicha reforma entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto “en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor (...)”. Con base en lo anterior, es claro que sigue vigente el texto del artículo 20, apartado A, fracciones II y III constitucionales hasta que se implemente el nuevo sistema procesal penal bajo los establecidos lineamientos<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> En el caso de la ciudad de Mérida, Yucatán, aplicable al presente caso, la implementación de dicha reforma se implementó el 1º de septiembre de 2013. Ver Acuerdo General no. Ex19-111019-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la implementación gradual del sistema de justicia penal acusatorio y oral en los tres departamentos judiciales del Estado de Yucatán.

142. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 1º constitucional reformado el diez de junio de dos mil once<sup>58</sup>, y con base en el principio pro persona, la interpretación del artículo 20 constitucional vigente debe hacerse bajo la perspectiva del derecho humano de que se trata, de conformidad con los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México<sup>59</sup>.
143. En relación con estos últimos, cabe destacar el artículo 9.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece que “Toda persona detenida será informada, al momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada sin demor, de la acusación formulada contra ella.” Por su parte, el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.
144. Además, cabe resaltar que el artículo 128 del Código de Procedimientos Penales, en su parte pertinente, establece que:

Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;

---

<sup>58</sup> Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

<sup>59</sup> Ver *mutatis mutandi* los amparos directos en revisión resueltos por esta Primera Sala 2801/2012, 1519/2013 y 1520/2013.

II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante;

III.- Se le harán saber los derechos **que le otorga la Constitución** Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;

b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;

c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código.

Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes.

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones. [...]

145. Ahora bien, corresponde analizar los hechos específicos del caso y llevar a cabo la debida interpretación constitucional. En una impresión inicial, de acuerdo con la época y entidad federativa en que fue tramitado el procedimiento penal, y bajo una estricta interpretación literal de las fracciones II y III del apartado A del artículo 20 constitucional, se podría haber entendido que no existía disposición expresa del momento específico

en el cual se le debía informar al detenido los motivos de su detención y de los derechos que le asistían.

146. Sin embargo, el artículo 1º constitucional establece una interpretación sistemática de la manera más amplia y efectiva, desde la constitución y los tratados internacionales, así como su debida interpretación. En el caso específico, tal como se estableció anteriormente, la Convención Americana establece que la persona detenida debe ser informada “sin demora” de la razón de la detención, sin importar si la misma se dio o no en una situación de flagrancia. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido lo siguiente:

83. El derecho de la persona detenida o retenida de ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, de los cargos formulados en su contra está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la que se practica *infraganti*. Por ello se puede concluir que el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho.

84. Tomando en cuenta que esa información permite el adecuado derecho de defensa, es posible sostener que la obligación de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención y acerca de sus derechos no admite excepciones y debe ser observado independientemente de la forma en que ocurra la detención.<sup>60</sup> (resaltado fuera del original)

147. Establecido lo anterior, la Primera Sala observa que de una interpretación armónica del texto del artículo 20 constitucional, del Código de Procedimientos Penales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que toda persona detenida tiene derecho a que, sin demora y desde el momento de su detención, se le informe sobre el motivo de la misma y sobre los derechos que le asisten. Al respecto, además de la interpretación del artículo 20 constitucional vigente al momento de los hechos a la luz del artículo 1 constitucional, esta Primera Sala considera que el texto del Código Federal de Procedimientos Penales también es claro al establecer que, en el supuesto de una detención es en ese momento en que se deben hacer efectivos para el detenido los derechos listados en el artículo 128 referido, incluyendo la imputación en su contra. El artículo 9.2

---

<sup>60</sup> Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 1º de febrero de 2006, Serie C No. 141.

del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen dicho derecho en similar sentido.

148. En este sentido, esta Primera Sala, en el Amparo Directo en Revisión 3435/2012, estableció que las autoridades que lleven a cabo una detención tienen la obligación de informar a la persona detenida los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten reconocidos en el artículo 20, apartado A, fracción IX constitucional antes de la reforma constitucional, y artículo 20 constitucional, apartado B, fracción III<sup>61</sup>. Además, en el Amparo en Revisión 703/2012 estableció que si la detención de una persona no cumple con el marco constitucional y convencional –reconocido en el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 7 de la Convención Americana y en la jurisprudencia interamericana–, la misma deberá considerarse arbitraria<sup>62</sup>. En este sentido, las autoridades que lleven a cabo una detención –tanto por orden judicial, por urgencia o por flagrancia– tienen la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. Dicha información, tal como se ha destacado, debe darse, además, ante el ministerio público y el juez.

149. Es decir, esta Sala disiente de la interpretación constitucional realizada por el Tribunal Colegiado en relación a que se respeta dicho derecho si su realización se efectiviza en el momento de la declaración ministerial. También disiente esta Sala con el Tribunal Colegiado cuando aquél considera, de manera genérica, que no se vulnera el derecho a la defensa de una persona detenida si se le leen los derechos en la declaración

---

<sup>61</sup> Amparo directo en revisión 3435/2012, resuelto en sesión de seis de febrero de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ver también, Amparo directo en revisión 1424/2012, resuelto en sesión de seis de febrero de dos mil trece, bajo la ponencia de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero.

<sup>62</sup> Amparo en revisión 703/2012. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del Engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda. Resuelto en sesión de 6 de noviembre de 2013. Sirve de apoyo, además, la tesis de rubro: FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARS ARBITRARIA. Tesis aislada 1a. CC/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 2014, página 545.

ministerial, pese al hecho que haya estado detenida, por horas, por agentes policiales, como en el presente caso.

150. El razonamiento detrás del derecho a ser informado en el momento de la detención, es el de evitar detenciones ilegales o arbitrarias y, además, garantizar el derecho de defensa de la persona detenida para que ésta cuente, en todo momento, de asistencia jurídica<sup>63</sup>.

151. El criterio ahora establecido es acorde con los que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a ser informado de las razones de la detención en su jurisprudencia evolutiva y progresiva, al interpretar el sentido del artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (supra)<sup>64</sup>. Específicamente en el caso *Cabrera García y Montiel Flores contra México*<sup>65</sup>, la Corte Interamericana destacó que:

105. Esta Corte ha establecido que, a la luz del artículo 7.4 de la Convención Americana, la información de los “motivos y razones” de la detención debe darse “cuando ésta se produce”, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo<sup>66</sup>. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal<sup>67</sup>.

106. Al respecto, la Corte observa que el artículo 7.4 de la Convención alude a dos aspectos: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. En el expediente no consta que al efectuar la detención se haya informado a las víctimas sobre las razones en las que se fundamentó su

---

<sup>63</sup> Ver, por ejemplo, Amparo en revisión 703/2012. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del Engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda. Resuelto en sesión de 6 de noviembre de 2013.

<sup>64</sup> Ver, por ejemplo, Corte IDH. Caso *López Álvarez vs. Honduras*. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 1º de febrero de 2006, Serie C No. 141, Corte IDH. Caso *Vélez Llor vs. Panamá*. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218. Corte IDH. Caso *Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

<sup>65</sup> Corte IDH. Caso *Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

<sup>66</sup> Cfr. *Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras*, párr. 82; *Caso Yvon Neptune vs. Haití*, párr. 107, y *Caso Usón Ramírez vs. Venezuela*, párr. 147.

<sup>67</sup> Cfr. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador*, párr. 71; *Caso Yvon Neptune vs. Haití*, párr. 107, y *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*, párr. 147.

detención, razón por la cual se vulneró el artículo 7.4 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel.

152. Respecto del anterior párrafo, la Primera Sala estima aplicable la tesis de esta Sala de rubro “CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO<sup>68</sup>” y la tesis de Pleno “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN UN LITIGIO<sup>69</sup>”, así como la tesis de Pleno de rubro “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA<sup>70</sup>.”

153. Ahora, si bien de los anteriores párrafos se desprende claramente que es la autoridad que detiene quien tiene la obligación de informar a la persona detenida sobre los motivos de la detención, corresponde hacer referencia a lo que sucede cuando la detención de un individuo se da en flagrancia por un particular, supuesto previsto en nuestro texto constitucional. En esa hipótesis, la obligación surge en el momento preciso que la persona detenida por el particular es puesta a disposición de una autoridad.

154. A la luz de lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia reitera que no puede considerarse como una interpretación constitucional acorde la de informar a la persona detenida de sus derechos y los motivos de su detención hasta la declaración ministerial. Hacerlo conllevaría a dejar a la persona desprotegida de su derecho a no ser detenida arbitraria o ilegalmente, así como de contar, desde el momento mismo de la detención, con una adecuada defensa. En consecuencia, se considera fundado el agravio relativo, puesto que de acuerdo con lo expuesto en los párrafos

---

<sup>68</sup> Tesis aislada 1a. XIII/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Febrero de 2012, página 650.

<sup>69</sup> Tesis aislada P. LXV/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Diciembre de 2011, página 556.

<sup>70</sup> Tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2014, página 204.

precedentes, la persona detenida debe ser informada de sus derechos y de los motivos de la detención desde el momento de la misma.

155. Finalmente, esta Primera Sala considera que la ausencia de cumplimiento de informar a la persona detenida de los motivos de la detención y de los derechos que le asisten puede impactar directamente en el proceso. En ese sentido, cuando se esté en dicho supuesto, el operador judicial debe de realizar un análisis detallado para determinar si el no haber sido informado de los motivos de la detención y de sus derechos –incluido el de ser asistido por un defensor– tuvo alguna consecuencia en el proceso y si hubo algún evento que vulnerara directamente el derecho de defensa del inculpado.

## **DECISIÓN**

**PRIMERO.** En relación con la flagrancia.

**A)** Si bien el Tribunal Colegiado realizó una incorrecta interpretación del concepto de flagrancia delictiva prevista en el artículo 16 constitucional, al considerar como elemento de la misma la denuncia de una persona al azar, del expediente, existen los elementos suficientes para determinar que existió, en el presente caso, flagrancia en el delito de posesión de droga. En consecuencia, el agravio es fundado pero inoperante.

**B)** Si bien el Tribunal Colegiado omitió realizar la interpretación respectiva del artículo 16 constitucional, en relación con los derechos de toda persona a no ser molestada salvo en los casos previstos constitucionalmente, se observa que, en el presente caso, se encontraba justificada la revisión policial al quejoso. En consecuencia, es infundado el agravio.

**SEGUNDO:** En relación con el principio de inmediatez.

El Tribunal Colegiado se apartó de la correcta interpretación del principio de inmediatez que se desprende de los términos “sin dilación” y “sin demora” – previstos en el artículo 16 constitucional, párrafos cuarto y quinto– por considerar la razonabilidad de una detención sin justificar válidamente su interpretación en cuanto a la razonabilidad de la temporalidad que debe mediar entre la detención y la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad ministerial. En consecuencia, es fundado dicho agravio.

**TERCERO.** En relación con el derecho de la persona detenida a ser informada sobre los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

El Tribunal Colegiado se apartó de la correcta interpretación del momento a partir del cual toda persona detenida tiene derecho a ser informada de los motivos de su detención y los derechos que le asisten –previsto en el artículo 20 constitucional, fracción B, numerales II y III– al considerar que tales derechos se entendían respetados si se llevaban a cabo durante la declaración ministerial y no antes. En consecuencia, el agravio es fundado.

**CUARTO.** Efectos.

En virtud de lo relatado en los puntos decisorios segundo y tercero, la interpretación realizada en el presente fallo debe tener un impacto en la revisión de los planteamientos de legalidad. Es por ello que, a juicio de esta Primera Sala, deben devolverse los autos relativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimo Cuarto Circuito para que, partiendo de la interpretación constitucional realizada en la presente ejecutoria, se avoque de nueva cuenta el estudio de la legalidad de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil doce –acto reclamado en el juicio constitucional del que deriva el presente recurso de revisión–, de conformidad con los efectos expresados en la presente sentencia.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

**R E S U E L V E :**

**PRIMERO.** En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** Devuélvanse los autos relativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimocuarto Circuito, para los efectos precisados en la parte final del último apartado de esta ejecutoria.

**Notifíquese;** con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro José Ramón Cossío Díaz, se reserva el derecho de formular voto particular.

Firman el Presidente de la Sala y Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE:**

**MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**

**SECRETARIO DE ACUERDOS:**

**LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES**

ESTA HOJA CORRESPONDE AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3998/2012, PROMOVIDO POR \*\*\*\*\*. FALLADO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SESIÓN DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN, SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. DEVUÉLVANSE LOS AUTOS RELATIVOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMOCUARTO CIRCUITO, PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE FINAL DEL ÚLTIMO APARTADO DE ESTA EJECUTORIA. CONSTE.-

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.